

RELACIÓN POLÍTICA Y EDUCACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA REALIDAD EDUCATIVA

Javier Salas Ramírez
Javiersalas1608@gmail.com

ORCID:

<https://orcid.org/0009-0003-4870-6571>

Institución Educativa
Liceo de Santa Librada, Huila.
Colombia

Juan Camilo Faya González
camilofaya@gmail.com

ORCID:

<https://orcid.org/0009-0003-4870-6571>

Institución Educativa
Rural Pantanillo,
Antioquia.
Colombia

Juan Carlos Olarte Rodríguez
jolarter@unal.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4405-3237>

Institución Educativa Caguancito, Huila.
Colombia

Recibido: 02/07/2025

Aprobado: 23/09/2025

RESUMEN

Este ensayo aborda la relación entre política y educación para la configuración de las realidades educativas en cualquier sociedad, utilizando una metodología basada en el análisis de contenidos y revisión bibliográfica que reflejan la realidad educativa. En Colombia, la educación se considera un derecho fundamental, consagrado en la Constitución, lo que implica que ha de atender las demandas de la comunidad. Las políticas educativas, determinadas por decisiones gubernamentales, impactan directamente en la calidad y equidad del sistema educativo, influyendo en la distribución de recursos, la infraestructura escolar y los contenidos curriculares. A lo largo de la historia, esta interrelación ha demostrado su importancia en la promoción de la igualdad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, muchas políticas¹ han perdido su enfoque en la calidad y el acceso

¹ Magister en Educación para la inclusión, Licenciado en Educación Física y deportes, Docente Básica Primaria en Neiva departamento de Huila, I.E. Liceo de Santa Librada sede El triángulo.

² Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Licenciado en Matemáticas, Docente Básica Secundaria en Abejorral departamento de Antioquia, I.E.R Pantanillo sede San Bernardo.

² Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Licenciado en Matemáticas y Física, Docente de Básica Secundaria en el Municipio de Garzón, Departamento de Huila, I.E. Caguancito.

universal, dejando a sectores vulnerables sin oportunidades educativas significativas. Es esencial establecer políticas claras que aborden la falta de acceso y el analfabetismo social, garantizando un aprendizaje equitativo. A pesar de los beneficios potenciales de una estrecha relación entre política y educación, persisten desafíos como la politización de contenidos, desigualdades en el acceso y carencia de recursos. Reconocer la educación como un acto político es fundamental para entender cómo las decisiones políticas afectan la equidad y calidad del sistema educativo. En este sentido, la educación debe ser priorizada como motor del progreso social, promoviendo una ciudadanía crítica y participativa. En conclusión, la interacción entre política y educación es determinante para construir sociedades más justas y equitativas, y se requiere un compromiso renovado para enfrentar los desafíos que persisten en el ámbito educativo.

Palabras claves: política, educación, equidad.

POLITICAL AND EDUCATIONAL RELATIONSHIP AS THE FOUNDATION OF EDUCATIONAL REALITY

ASBTRACT

This essay addresses the relationship between politics and education in shaping educational realities in any society, using a methodology based on content analysis and a bibliographic review that reflects the educational reality. In Colombia, education is considered a fundamental right, enshrined in the Constitution, which implies that it must meet the demands of the community. Educational policies, determined by government decisions, directly impact the quality and equity of the educational system, influencing the distribution of resources, school infrastructure, and curricular content. Throughout history, this interrelationship has demonstrated its importance in promoting equality and sustainable development. However, many policies have lost their focus on quality and universal access, leaving vulnerable sectors without meaningful educational opportunities. It is essential to establish clear policies that address lack of access and social illiteracy, ensuring equitable learning. Despite the potential benefits of a close relationship between politics and education, challenges such as the politicization of content, inequalities in access, and lack of resources persist. Recognizing education as a political act is fundamental to understanding how political decisions affect the equity and quality of the education system. In this sense, education must be prioritized as a driver of social progress, promoting critical and participatory citizenship. In conclusion, the interaction between politics and education is crucial for building more just and equitable societies, and a renewed commitment is required to address the challenges that persist in the field of education.

Keywords: politics, education, equity.

INTRODUCCIÓN

La relación que hay entre la política y la educación en hoy en día, desempeña un papel fundamental e importante en la configuración de las realidades educativas en cualquier contexto social. Por ejemplo, en Colombia la educación es entendida como un derecho fundamental, consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (CPCOL, 2010) la cual señala que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (p.36), conforme las exigencias de la población en general.

La educación no puede considerarse simplemente un asunto técnico o pedagógico, sino que está profundamente entrelazada con consideraciones políticas que van desde la financiación hasta la formulación de planes de estudio. Las normas orientadas hacia la educación comprenden el conjunto de directrices y resoluciones establecidas por las autoridades gubernamentales con el propósito de orientar y regular el sistema educativo. La forma en que se establecen estas políticas, permite asignar los recursos y tomar decisiones a nivel político, las cuales impactan directamente en la calidad y equidad de la educación. Por lo tanto, se indagará cómo la relación entre la política incide en el desarrollo de las personas en su conjunto.

En el ámbito educativo, la función que cumple la escuela no se limita a transmitir conocimientos, sino que también ejerce una influencia esencial en la conformación de la sociabilidad y el orden social deseado por el estado, sea cual sea su naturaleza. Por un lado, la educación escolar se encarga de inculcar o transmitir en las personas los valores, normas y formas de comportamiento que se consideran socialmente hegemónicos y legitimados por el poder establecido. Esto se logra a través de la enseñanza de la historia, la moral, cívica, las leyes y las costumbres de un pueblo, las cuales son presentadas como las correctas y deseables dentro de la sociedad. Sin embargo, Millán (2016) aclara que: “no garantiza que estas normas, por más auténticas o propias que sean, sean moral o éticamente correctas o superiores a la obediencia a las normas socialmente aceptadas” (p. 135), entre tanto, la escuela se convierte en una institución clave para la reproducción del statu quo y la consolidación del orden social vigente.

La interacción entre la política y la educación a lo largo de la historia, ha generado amplios debates y reflexiones, evidenciando su impacto significativo en la configuración de la realidad educativa en cualquier sociedad. Desde esta perspectiva, a través de la concepción política en educación, Capella (2004) sostiene que: “concebida para servir a necesidades humanas esenciales, promover la igualdad entre los hombres y contribuir a una estrategia de desarrollo sostenible en la que pueda participar la comunidad” (p. 13), por ende, la importancia de la

educación como herramienta transformadora y su estrecha vinculación con el entorno político en el que se desarrolla.

Las decisiones políticas en materia educativa no solo determinan aspectos como la distribución de recursos, la infraestructura escolar o el acceso a la educación, sino que también influyen en los contenidos curriculares, los métodos pedagógicos y la formación de los docentes. De esta manera, la política educativa se convierte en el marco normativo que moldea las experiencias de aprendizaje de las generaciones presentes y futuras, definiendo las oportunidades y desafíos que enfrentarán en su desarrollo personal y profesional, resultando necesario analizar críticamente cómo las decisiones políticas impactan en la equidad y calidad del sistema educativo.

La política en la realidad educativa, especialmente en las diferentes comunidades Latinas, ha desempeñado un papel de gran importancia en la equidad y calidad del sistema educativo. Como menciona Blanco (2006) es necesario: “contribuir a superar las desigualdades de origen de los alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas” (p.2). Esto incluye un componente de calidad para transformar sociedades y promover la igualdad de oportunidades. También es de gran importancia la asignación de recursos de manera justa, la implementación de programas de apoyo a comunidades vulnerables y la evaluación constante de los resultados son aspectos clave que

deben ser considerados en las políticas orientas en la educación con el propósito de garantizar un acceso equitativo y de calidad.

También es de gran importancia la asignación de recursos de manera justa, la implementación de programas de apoyo a comunidades vulnerables y la evaluación constante de los resultados, aspectos clave que deben ser considerados en las políticas educativas para garantizar un acceso equitativo a una educación.

Sin embargo, con el paso del tiempo, estas políticas han perdido su horizonte dejando a un lado la educación de calidad y acceso para todos, teniendo deficiencias en la respectiva implementación de las políticas educativas en pro de niñas, niños y jóvenes que necesitan un devenir de sueños mediante aprendizajes significativos mediante un sistema adecuado y oportuno con justicia, igualdad y equidad.

Por ende, es de carácter primordial que se establezcan políticas educativas claras y efectivas para abordar la falta de acceso a la escuela, combatir el analfabetismo social y brindar oportunidades con justicia equitativa de aprendizaje para todos los individuos, siendo estas políticas diseñadas de manera integral, considerando factores como la distribución equitativa de recursos, la implementación de programas de apoyo a comunidades desfavorecidas y la promoción de la educación inclusiva.

No obstante, es importante considerar que las medidas educativas no siempre producen los resultados esperados. El sistema educativo puede experimentar disparidades y desigualdades como resultado de una implementación inadecuada, la falta de recursos o de consideración de las necesidades específicas de ciertas comunidades propias de su contexto. Por ejemplo, las políticas de financiamiento injustas pueden mantener las diferencias existentes entre las escuelas urbanas, rurales, áreas de bajos y altos ingresos.

Al priorizar la educación como un derecho fundamental, se puede avanzar significativamente en el desarrollo de sociedades con mayor justicia y equidad, en el que cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su potencial y contribuir al progreso social. Así convirtiendo la educación en el motor impulsor para combatir los desaciertos a las sociedades marginadas, al brindarles herramientas y oportunidades que puedan empoderar a los individuos y fomentar la igualdad de condiciones. En este sentido, invertir en una educación inclusiva y de calidad no solo beneficia a los individuos a nivel personal, sino que también fortalece el tejido social y sienta los pilares para un desarrollo equitativo durante su aplicabilidad.

La educación tiene el potencial de formar no solamente ciudadanos críticos y participativos en la sociedad, sino también la transformala hacia una educación democrática. Según lo expresado por Mejía (2006), "no se limita a formar ciudadanos que sólo hagan uso de sus derechos sociales, económicos y políticos

otorgados por el Estado, sino que la práctica ciudadana representa una actividad capaz de transformar estructuras políticas, sociales y económicas" (p. 13). Esto destaca la importancia de una educación que promueva el pensamiento crítico y de participación activa en la comunidad. Las políticas educativas deben enfocarse en desarrollar habilidades como el análisis, la argumentación y la empatía, que son fundamentales para una ciudadanía informada y comprometida con su entorno social.

A pesar de los beneficios potenciales de una estrecha relación entre política y educación, existen desafíos significativos que deben ser abordados. Entre estos desafíos se encuentran la politización de la educación, que puede llevar a la manipulación de los contenidos curriculares con fines particulares, la inequidad en la oportunidad de recibir una educación de calidad, que perpetúa las brechas sociales y económicas de un país o una nación, imperando la falta de consenso social en torno a las prioridades educativas, que dificulta la implementación efectiva de políticas que beneficien a toda la población en todos los entornos sociales.

Así mismo, la influencia de intereses particulares y la falta de recursos adecuados que representan obstáculos importantes que necesitan atención oportuna y puesta en marcha por parte de dirigentes políticos y educativos. Es fundamental abordar los retos de manera unificada y colectiva para garantizar un

sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad para el acceso de todos como primicia del estado.

En la relación entre la educación y la política surge un concepto esencial. García y García (2022) lo menciona así: “La educación como acto político, es decir, el cimiento fundamental de los procesos de concientización y liberación, donde lo social y el conflicto se entienden en el contexto sociohistórico particular de la realidad latinoamericana” (p. 267). Este concepto resalta la relación intrínseca que existe entre la educación y el poder político, y por tanto resalta la necesidad de reflexionar críticamente sobre cómo las decisiones políticas impactan en la educación y viceversa. Los desafíos como la politización de los contenidos curriculares, la falta de recursos en determinadas comunidades y la brecha digital son cuestiones urgentes que requieren una atención cuidadosa por parte de los responsables.

Esta mirada de la educación como una manifestación de impacto político social no solo nos lleva a verla como un reflejo de las dinámicas de poder, sino también como un terreno fructífero para cuestionar y reinventar esas mismas estructuras. En Latinoamérica, donde las huellas de la desigualdad y los conflictos sociales han dejado una marca profunda en los sistemas educativos, esta idea cobra un sentido especial. La politización de los planes de estudio, por poner un caso, no es solo un problema que resolver, sino también una ventana para

incorporar miradas críticas que ayuden a entender y transformar las raíces de las injusticias de una sociedad.

Y cuando hablamos de la falta de recursos o de la brecha digital, no solo nos enfrentamos a obstáculos prácticos, sino a indicadores de desigualdad que exigen respuestas que vayan más allá de lo técnico. En este sentido, la educación se vuelve un espacio de lucha y, al mismo tiempo, de posibilidad para todos, donde lo político y lo pedagógico se mezclan para abrir caminos hacia una sociedad consciente y libre.

Al reconocer la educación entendida como una acción con implicaciones políticas, según Ovelar (2005), “hay que asumirlo puede tanto contribuir a mantener como a cambiar las relaciones sociales entre los seres humanos” (p. 194). Entonces se debe realizar el análisis más minucioso de cómo las decisiones políticas impactan en la igualdad, equidad, justicia, calidad y la pertinencia del sistema educativo. Es fundamental que las políticas educativas sean diseñadas desde un plan integral, considerando la diversidad de necesidades y realidades de la población en su contexto, con el objetivo de salvaguardar una educación para todos.

Este enfoque integral en la formulación de políticas encaminadas hacia la educación debe ir acompañado de un compromiso real por parte de los entes gubernamentales y las instituciones educativas para garantizar que cada persona

tenga oportunidad a una educación de calidad, independientemente de su origen geográfico, socioeconómico o cultural. La inclusión de voces diversas en el proceso de toma de decisiones es crucial para crear un sistema educativo que no solo responda a las demandas del mercado laboral, sino que también promueva la justicia social y el desarrollo humano. Además, es necesario implementar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan identificar y corregir desigualdades, asegurando así que la educación cumpla su función transformadora en la sociedad y contribuya a la construcción de un futuro equitativo y sostenible.

Al priorizar el acto educativo como un derecho de toda persona como incentivo para el desarrollo de las comunidades, como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016); sientan la base para construir sociedades más justas, inclusivas y democráticas, donde cada individuo tenga la oportunidad de desarrollarse, potenciar y contribuir al bienestar colectivo. En este sentido, la interacción entre política y educación se convierte en un eje fundamental para el fortalecimiento, hacia un futuro sostenible para todas las personas que lo requieran sin ninguna limitante.

Además, es vital que las políticas educativas no solo se centren en la cantidad de recursos disponibles, sino también en la calidad de la enseñanza y en la formación integral de los educadores. De esta manera, se logrará no solo el desarrollo individual, sino también el empoderamiento de las comunidades, lo que

contribuirá a la construcción de un tejido social más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

En este sentido, un futuro sostenible requiere de sistemas educativos inclusivos que no dejen a nadie atrás, eliminando barreras que limitan el acceso a la educación, como la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación o la falta de infraestructura adecuada. En este marco, la educación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta de transformación social que permite generar cambios estructurales en pro del bienestar colectivo. Una política educativa sólida y sostenida en el tiempo debe contemplar estrategias que fortalezcan la inclusión y promuevan el acceso universal.

Por otra parte, otro elemento a mencionar es la violencia relacionada con el conflicto armado que también ha afectado la realidad educativa colombiana, con la interrupción al servicio educativo de miles de niños, niñas y adolescentes en áreas afectadas por la violencia. Aun así, hay que entender que la desigualdad en el sector educativo esta relacionado con la pobreza, sin desconocer que: “el lugar de residencia, el género, el idioma, la pertenencia étnica o las discapacidades, cuya interacción agrava la situación y las posibilidades reales de los más vulnerables” (Ramón, 2015, p. 429).

Es esencial que se implementen programas de apoyo y recuperación que atiendan las necesidades específicas de los estudiantes que han sufrido

interrupciones educativas debido a la violencia. Esto incluye no solo la reintegración en el sistema educativo, sino también el acompañamiento psicosocial que permita a los niños, niñas y adolescentes superar traumas y desarrollar habilidades socioemocionales.

Al abordar de manera integral las consecuencias del conflicto armado y la desigualdad en el acceso a la educación, se puede fomentar un sistema educativo que no solo imparta conocimientos, sino que también promueva la resiliencia, la cohesión social y el respeto por la diversidad, sentando así la base para un futuro más justo y pacífico en Colombia.

La educación en el territorio nacional enfrenta desafíos profundos que van más allá de las limitaciones económicas, de infraestructura, la formación docente y las condiciones laborales de los profesores, lo que afecta la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Estos factores, sumados a la deserción escolar y la falta de oportunidades para los jóvenes, reflejan una problemática multidimensional que requiere atención urgente y soluciones integrales

En línea con lo anterior, la falta de recursos y la corrupción han obstaculizado los avances por desarrollar la infraestructura y fortalecer el proceso de calidad en la educación colombiana. Lamentablemente es la población rural donde se concentra en gran cantidad este tipo de afectaciones. En este sentido, se sostiene que “la pobreza monetaria en las zonas rurales de Colombia presentó un

incremento, reflejando las persistentes desigualdades económicas entre las áreas urbanas y rurales del país.” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística Salud [DANE], p. 2021).

Para abordar estos desafíos, es crucial fomentar una mayor colaboración y diálogo entre los formuladores de políticas, los educadores, los estudiantes y otras partes interesadas clave en el proceso educativo. Esto implica la necesidad de una planificación estratégica a largo plazo que priorice la equidad, la inclusión y la calidad educativa. Además, es esencial promover una cultura de evaluación y aprendizaje continuo, donde las políticas se ajusten en función de la retroalimentación y la evidencia recopilada de manera sistemática.

Ahora bien, observando la educación desde otra perspectiva, también tiene la función de generar capital humano idóneo que pueda ser sujeto productivo para un mercado laboral y en beneficio de los procesos económicos del poder social. Es decir, la escuela no solo busca formar ciudadanos obedientes y socializados, sino también trabajadores eficientes y competitivos que contribuyan al desarrollo económico del país, desde donde Garrido (2007) señala que: “se podría formular un modelo más o menos cercano a los conocimientos, capacidades y habilidades propias que surgen por el proceso educativo y que son requeridos para cada trabajo de la esfera productiva” (p.74). Así, la lógica del proceso educativo va más allá de un simple compartir conocimientos, mediante de su doble función como agente de socialización y de formación de capital

humano, sino que la convierte en un mecanismo central para que el estado pueda mantener y perpetuar su hegemonía, al mismo tiempo que fomenta las capacidades productivas requeridas por el modelo económico imperante. Garrido (2007) afirma que:

Es necesario un análisis cuidadoso de la teoría del capital humano para evitar tratar al individuo como mera herramienta del crecimiento económico, no olvidando la consideración clásica de la educación que aboga por el desarrollo armónico de las capacidades individuales para la resolución de las necesidades sociales (p.74).

La sociedad ha mantenido históricamente y de manera sistemática la enseñanza de los valores hegemónicos, determinando cuáles de ellos deben ser practicados, a lo largo del tiempo teniendo en cuenta que “la hegemonía no es estática pues sus formas de acción varían en cada sociedad según el momento histórico que se vive” (Ramírez y Soto, 2022, p. 183).

Esto se logra a través de la actividad escolar, encaminando al estudiante a realizar tareas que lo introducen a vivir en sociedad. En la actualidad, podemos observar este fenómeno en el modelo educativo por competencias, el cual transmite e inculca únicamente en la población los valores empresariales requeridos, aquellos que más benefician al estado hegemónico en el contexto contemporáneo.

Bajo esta premisa, se fomenta un ideal de hombre y sociedad frecuentemente a la ganancia, donde la inteligencia y la eficiencia son los medios adecuados para conseguir el éxito. Solano, (2021) afirmó que “la sociedad moderna contemporánea se sostiene en los ideales de libertad, igualdad y competencia, esta no garantiza que la ganancia sea para todos” (p.6), el poder que se ejerce a través de la imposición

sistemática del modo de vida hegemónico, llevada a cabo por la institución escolar a través de los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas imperadas por cada institución, convirtiéndose la escuela en un agente clave para la conformación de la sociabilidad deseada por el estado y las clases dominantes.

Esto se puede evidenciar de manera clara en el modelo de educación por competencias en el que vivimos actualmente, Obaya et al., (2011) refieren que: “quien aprende lo hace al identificarse con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las metodologías que utiliza” (p.64), el cual promueve un ideal de un sujeto alineado con los valores del neoliberalismo, como la competitividad, la eficiencia y la búsqueda del éxito individual mediante la acumulación de capital humano. Este modelo educativo transmite e infunde una visión de la sociedad donde priman los intereses empresariales y la lógica del mercado, en detrimento de los principios de solidaridad, justicia social y bien común.

Entonces, la escuela mirándola desde esta perspectiva cumple la función política fundamental, pero compartida con las redes, al servicio de los intereses del estado y las élites. Al mismo tiempo que dificulta la apreciación de las críticas y alternativas que cuestionen los valores dominantes en torno a la democratización y la transformación de los sistemas educativos. Si pretendemos ver la educación como un medio para la emancipación mediante una formación crítica sería bastante idealista, debido a que la libertad y autonomía no es cierta en un ser que: “en todo momento sometido a estructuras de relaciones de poder, por lo que tal y como la plantean las corrientes críticas, la

emancipación es teórica y prácticamente imposible de concretarse” (Morales, 2014, p.16).

Si pretendemos concebir la educación como un camino hacia la emancipación a través de la educación crítica, estaríamos adoptando una postura idealista, ya que la libertad y la autonomía no son reales en un ser que:

En conclusión, la estrecha relación entre la política y la educación es un factor determinante en la configuración de la realidad educativa en cualquier sociedad. Las decisiones políticas en materia educativa impactan directamente en la equidad, calidad de vida y relevancia del sistema educativo, moldeando las experiencias de aprendizaje de las nuevas generaciones.

Por medio de la asignación equitativa de recursos, la promoción de valores cívicos y el fomento del pensamiento crítico; las políticas educativas pueden contribuir significativamente a la formación de ciudadanos comprometidos, informados y participativos en la sociedad.

Del mismo modo, la educación debe estar alineada con los desafíos globales, incorporando enfoques que fomenten el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la formación en competencias para la vida y el trabajo. La integración de la educación en la agenda política debe responder a un compromiso continuo por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto, asegurando la formación de las nuevas generaciones que les permitan participar activamente.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados a lo largo del tiempo, persisten desafíos que demandan una atención constante y un compromiso permanente por parte de los responsables políticos, educativos y sociales. La influencia de intereses individuales económicos y de poder, la desigualdad en el camino a una educación de alto nivel y la falta de acuerdos en torno a las prioridades educativas son obstáculos que deben ser abordados de manera urgente para garantizar un sistema educativo inclusivo y equitativo.

En última instancia, la educación sigue siendo primordial para el desarrollo humano y social, y su interacción con el ámbito político es esencial para construir sociedades más justas, democráticas y prósperas. Es necesario seguir reflexionando, debatiendo y actuando en torno a esta relación vital, con el objetivo de promover una educación que no solo transforme a los individuos, sino que también contribuya al cambio positivo en el mundo en el que vivimos.

REFERENCIAS

- Blanco. R. (2006). La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy. <https://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf>
- Capella. J. (2004). Política educativa: aportes a la política educativa peruana <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/10565/11036>
- Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Recuperado de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/desarrollo_social_inclusivo.pdf
- https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf
- García. R y García. A. (2022). La educación como acto político en Freire. La teoría antidialógica, la arbitrariedad cultural y la educación bancaria: nociones para comprender la reproducción de las desigualdades en América Latina. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/4316/5829>
- Garrido, C. (2007). La educación desde la teoría del capital humano y el otro. *Educere - Artículos arbitrados*(36), 73-80. <https://ve.scielo.org/pdf/edu/v11n36/art10.pdf>
- Mejía. H. (2006). Ciudadanía y educación. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4953724>
- Millan, G. (2016). Sobre la distinción entre ética y moral. *Isonomía*(45), 113-139. <https://www.scielo.org.mx/pdf/is/n45/1405-0218-is-45-00113.pdf>
- Morales, L. (2014). El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. *Actualidades investigativas en educación*, XIV(2), 1-23. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a20v14n2.pdf>
- Obaya, A., Vargas, Y., & Delgadillo, G. (2011). Aspectos relevantes de la educación basada en competencias para la formación profesional. *Evaluación educativa - Universidad nacional autónoma de México*, I(22), 63-68. <https://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v22n1/v22n1a11.pdf>
- Ovelar N. (2005). Educación, Política y Ciudadanía Democrática a través de la especial mirada de paulo freire. <https://www.redalyc.org/pdf/659/65913205002.pdf>
- Solano Vázquez, Eduardo Pensar la sociedad a través de la educación Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa, vol. 12, núm. 23, 00027,

- 2021, Julio-Diciembre Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades DOI: <https://doi.org/10.32870/dse.v0i23.928>
- Ramírez, L., & Soto, Y. (2022). Educación, Estado y Hegemonía desde Gramsci: el papel de los intelectuales en la transición democrática en México. *Millcayac - Revista digital de ciencias sociales*, VIII(15), 177-198. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millca-digital/article/view/4625/4019>
- Ramón, M. (2015). Inclusión y equidad: una educación que multiplica oportunidades. *Entreculturas*, 34, 428-453. Recuperado de https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131655/1/ENTRECULTURAS_Inclusion_y_equidad_Una_ed.pdf